

TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL: San Salvador, a las doce horas y veinticinco minutos del día seis de marzo de dos mil catorce.

Por agregado el oficio presentado el seis de febrero del corriente año por el doctor Leonel Flores Sosa, Director General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), mediante el cual evacua el requerimiento formulado; junto con la documentación que acompaña.

El presente procedimiento inició por denuncia del señor

contra los señores Carlos Farabundo Molina Quinteros, Marcial Antonio Villatoro Herrera, Manuel de Jesús Carpio Martínez, José Atilio Alcántara Benavides, José Dolores Romero, Cristóbal Carranza Rivas, Rafael Eduardo Núñez Villalta, Rosalina Rivera viuda de Tenorio, Rosa Lilian Menjívar de Urrutia, Vilma Maricela Corvera de López, Inocente Cárcamo Ibarra, Juan Carlos Ibarra Velásquez, Héctor Santos Portillo Romero y José Inés Jovel Tisnado, todos en su entonces calidad de miembros del Concejo Municipal de La Libertad, departamento de La Libertad, durante el período comprendido entre mayo de dos mil nueve a abril de dos mil doce.

CONSIDERANDOS:

I. Antecedentes de hecho.

1. La denuncia se basó en la falta de respuesta de los servidores públicos denunciados a los escritos de fechas veintitrés de julio y trece de septiembre de dos mil diez, así como al de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, por medio de los cuales el señor solicitó la revocatoria del acuerdo número treinta y cuatro, adoptado por el referido Concejo Municipal el nueve de julio de dos mil diez, lo cual habría transgredido el deber ético de *cumplimiento* consignado en el artículo 5 letra b) de la derogada Ley de Ética Gubernamental, en lo sucesivo LEG.

2. Mediante resolución de las diez horas y treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil once se admitió la denuncia, declarando a la vez improcedente algunos puntos de esta, y se concedió a los servidores públicos denunciados el plazo de cinco días hábiles para que ejercieran su derecho de defensa; sin embargo, ninguno de ellos se pronunció oportunamente al respecto (fs. 12 al 15).

3. En la resolución de las nueve horas y treinta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil doce, el Tribunal modificó la calificación jurídica de los hechos denunciados reconduciéndolos a una posible violación a la prohibición ética de *retardar sin motivo legal los trámites o la prestación de servicios administrativos*, establecida en la letra i) del artículo 6 de la LEG derogada.

En la misma resolución, se decretó la suspensión del procedimiento contra los señores Rafael Eduardo Núñez Villalta, Rosalina Rivera viuda de Tenorio, Inocente Cárcamo Ibarra, Héctor Santos Portillo Romero y José Inés Jovel Tisnado, por haber perdido la calidad de servidores públicos.

Adicionalmente, se declaró rebeldes a los señores Carlos Farabundo Molina Quinteros, Marcial Antonio Villatoro Herrera, Manuel de Jesús Carpio Martínez, José Atilio Alcántara Benavides, José Dolores Romero, Cristóbal Carranza Rivas, Rosa Lilian Menjívar de Urrutia, Vilma Maricela Corvera de López y Juan Carlos Ibarra Velásquez.

Por último, en esa decisión se abrió a pruebas el procedimiento por el término de ocho días hábiles, durante el cual ninguno de los intervinientes ofreció medios de prueba (f. 31).

4. Mediante la resolución de las ocho horas y treinta minutos del veintinueve de enero de dos mil trece se decretó la continuación del procedimiento, se previno al abogado Oscar Glen Turcios Umaña, quien pretendía comparecer como apoderado general judicial de los servidores públicos denunciados, que legitimara en debida forma su personería, y se ordenó prueba complementaria (f. 52).

5. En la resolución de las once horas y treinta minutos del trece de marzo de dos mil trece, se declaró sin lugar la intervención del abogado Turcios Umaña por haber comparecido como apoderado del municipio de La Libertad y no como mandatario de los denunciados, y se reactivó el procedimiento contra los señores Rafael Eduardo Núñez Villalta e Inocente Cárcamo Ibarra, por tener nuevamente la calidad de servidores públicos (f. 73).

De igual forma, se requirió al Registrador Nacional de las Personas Naturales que informara cuáles eran las direcciones de residencia de los señores Héctor Santos Portillo Romero y José Inés Jovel Tisnado; y se solicitó al Concejo Municipal de La Libertad que remitiera el acta de la notificación realizada al denunciante del acuerdo número veinticuatro de fecha veintitrés de septiembre de dos mil once.

El primer requerimiento fue atendido el quince de mayo de dos mil trece, mientras que el Concejo Municipal de La Libertad no cumplió lo solicitado (fs. 90 y 91).

6. Mediante la resolución de las nueve horas y veinte minutos del veintitrés de julio de dos mil trece se requirió por segunda vez al Concejo Municipal de La Libertad que remitiera el acta de notificación al interesado del acuerdo número veinticuatro, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil once.

Además, se solicitó al Jefe del Departamento de Inspección y Afiliación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social que informara el lugar de trabajo de los señores Rosalinda Rivera viuda de Tenorio y Héctor Santos Portillo Romero (fs. 92).

Tales requerimientos fueron cumplidos en fechas doce y treinta de septiembre de dos mil trece, por algunos denunciados y por funcionarios del ISSS, respectivamente (fs. 118 al 122).

7. En la resolución de las catorce horas y diez minutos del trece de enero del corriente año, se tuvo por contestada la denuncia por parte de los señores Inocente Cárcamo Ibarra y Rafael Eduardo Núñez Villalta; y también se solicitó al Director General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social que informara el lugar de trabajo de la señora Rosalina Rivera viuda de Tenorio (f. 125).

Así, el seis de febrero del año que transcurre el doctor Leonel Antonio Flores Sosa remitió un informe, emitido por la Jefa de la Sección de Control de Ingresos de la institución, en el que se detalla que el lugar de trabajo de la señora Rivera viuda de Tenorio es la alcaldía municipal de La Libertad (fs. 131 y 132).

Al respecto, en virtud de haber desaparecido la causa que motivó la suspensión del procedimiento respecto de la señora Rivera viuda de Tenorio, es procedente reactivarlo en cuanto a ella de conformidad con el artículo 62 del Reglamento de la LEG derogada.

II. Fundamentos de derecho.

Liminarmente la conducta atribuida a los denunciados se identificó como una posible transgresión al deber ético de *cumplimiento*, regulado en el artículo 5 letra b) de la derogada Ley de Ética Gubernamental, en lo sucesivo LEG; sin embargo, esta fue recalificada a la infracción a la prohibición ética de *retardar sin motivo legal los trámites o la prestación de servicios administrativos*, establecida en el artículo 6 letra i) de la misma ley.

Es importante reafirmar que la ética pública está conformada por un conjunto de principios que orientan a los servidores estatales y los conducen a la realización de actuaciones correctas, honorables e intachables, entre ellas el actuar con apego a la Constitución y a las leyes dentro del marco de sus atribuciones.

Así, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción destacan la importancia de considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de los propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer la adecuada comprensión de los servidores públicos de las normas éticas que rigen sus actividades y, en términos generales, a prevenir la corrupción.

Bajo esa lógica, la prohibición ética de *retardar sin motivo legal los trámites o la prestación de servicios administrativos*, establecida en el artículo 6 letra i) de la LEG derogada, tiene como propósito que los mismos se diligencien con celeridad y no sean diferidos, detenidos, entorpecidos o dilatados, salvo que exista una razón o fundamento legal para ello.

El retardo sin motivo legal resulta antagónico a la diligencia por parte de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, pues ellos están obligados a atender sus tareas y actividades en forma diligente y eficiente, conforme a las leyes y reglamentos aplicables.

Ello en razón de que el desempeño de una función pública exige dar respuesta a los intereses generales de la comunidad; los cuales deben ser satisfechos –en sentido jurídico– a la brevedad posible, a través de procedimientos expeditos y eficaces, dentro del marco de la legalidad.

III. Hechos probados.

Con la prueba producida en el transcurso del procedimiento se ha establecido con total certeza que:

1) El veintitrés de julio de dos mil diez el señor [redacted] interpuso recurso de revocatoria contra el acuerdo número treinta y cuatro adoptado por el Concejo Municipal de La Libertad, el nueve de julio de dos mil diez (fs. 7 y 8).

2) El trece de septiembre de dos mil diez y el treinta y uno de agosto de dos mil once el señor [redacted] por medio de su apoderado, reiteró su petición al mencionado Concejo Municipal (fs. 9 al 11).

3) El veintitrés de septiembre de dos mil once, en sesión ordinaria, el Concejo Municipal de La Libertad acordó declarar no ha lugar la petición de revocatoria del acuerdo número treinta y cuatro del nueve de julio de dos mil diez, formulada por el mencionado ciudadano y reiterada por su apoderado (f. 69).

4) El veintisiete de septiembre de dos mil once el señor [redacted] recibió una comunicación de fecha doce de esos mismos mes y año, suscrita por el señor Oscar Glen Turcios Umaña, Jefe del Departamento Jurídico de la Alcaldía de La Libertad, mediante la que se hace de su conocimiento que el Concejo Municipal acordó denegarle la solicitud de revocatoria interpuesta contra el acuerdo número treinta y cuatro del nueve de julio de dos mil diez (f. 121).

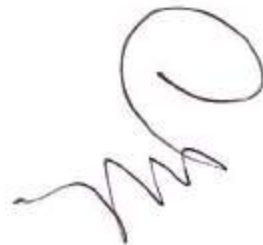
IV. Consideraciones aplicables al caso concreto.

En el presente procedimiento con los medios probatorios practicados se ha establecido de forma *clara y convincente* que el veintitrés de julio de dos mil diez el señor [redacted] interpuso recurso de revocatoria contra el acuerdo del Concejo Municipal de La Libertad número treinta y cuatro, del nueve de julio de dos mil diez. Además, se ha acreditado que el interesado reiteró dicha petición ante el citado Concejo los días trece de septiembre de dos mil diez y treinta y uno de agosto de dos mil once.

Por otra parte, ha quedado plenamente demostrado que los funcionarios denunciados comunicaron al interesado la denegatoria del recurso de revocatoria hasta el veintisiete de septiembre de dos mil once; es decir, más de un año después de su interposición, sin brindar a lo largo de este procedimiento ninguna razón justificativa de dicho atraso.

Llama la atención también que esa comunicación se hizo efectiva por medio de nota suscrita por el Jefe del Departamento Jurídico de la municipalidad, fechada el *doce de septiembre*; pese a que el acuerdo municipal por el que se declaró no ha lugar la petición de revocatoria apuntada fue tomado en sesión celebrada el *veintitrés de septiembre*, ambas fechas de dos mil once.

En este punto es preciso destacar que, a tenor de los artículos 38 –sobre la celebración de sesiones del Concejo– y 136 –relativo al trámite del recurso de revocatoria– del Código Municipal, los funcionarios denunciados debieron haber resuelto la revocatoria interpuesta el veintitrés de julio de dos mil diez en una sesión del Concejo del siguiente mes de ese año; sin embargo, lo hicieron –se insiste– hasta el veintitrés de septiembre de dos mil once, como ha quedado demostrado en autos.



En ese sentido, los denunciados retardaron el trámite del recurso de revocatoria interpuesto por el señor _____ al exceder sin motivo legal el plazo fijado por el Código Municipal para diligenciar el mismo; lo que no se desvanece con la notificación de la respuesta de dicho recurso brindada finalmente al recurrente, en la que por cierto se aludió únicamente al escrito presentado por su apoderado el treinta y uno de agosto de dos mil once, soslayando sin explicación sus escritos de julio y septiembre de dos mil diez.

En esas circunstancias, al haber retardado en más de un año el trámite del recurso de revocatoria interpuesto el veintitrés de julio de dos mil diez por el señor _____ se concluye que los denunciados que integraron como miembros propietarios el Concejo Municipal de la Libertad entre mayo de dos mil nueve y abril de dos mil doce, transgredieron sin duda alguna la prohibición ética contenida en el artículo 6 letra i) de la LEG derogada, por lo que deberá determinarse la responsabilidad del caso.

Ello es así, porque al brindar dichos funcionarios en particular la respuesta al recurso apuntado, según la certificación que obra a fs. 69 y 111 del expediente, se colige que estos habrían ejercido sus cargos de manera ininterrumpida durante el período del retardo verificado en autos; situación que no fue en ningún momento controvertida ni negada por ellos.

Por último, cabe aclarar que si bien inicialmente se tuvo como presuntos infractores a los miembros suplentes del referido Concejo Municipal, no se ha establecido en el transcurso del procedimiento que alguno de ellos haya participado en las sesiones posteriores a la interposición del mencionado recurso, para el estudio y resolución del mismo; y, por consiguiente, no cabe atribuirles responsabilidad alguna por la demora en su tramitación.

Por tal motivo, deberá absolverse a tales denunciados de la infracción ética analizada, haciendo extensiva esta decisión, por razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, a aquellas personas respecto de quienes el procedimiento se encontraba aún suspendido, por los motivos previamente indicados.

V. Imposición de sanción.

Según el Registro de Sanciones de este Tribunal es la primera vez que los señores Carlos Farabundo Molina Quinteros, Marcial Antonio Villatoro Herrera, Manuel de Jesús Carpio Martínez, José Atilio Alcántara Benavides, José Dolores Romero, Cristóbal Carranza Rivas, Rafael Eduardo Núñez Villalta, Rosalina Rivera viuda de Tenorio, Rosa Lilian Menjívar de Urrutia y Vilma Maricela Corvera de López, transgreden la Ley de Ética Gubernamental, de manera que deberá imponérseles la sanción de amonestación escrita.

Por tanto, con base en los artículos 1 de la Constitución, VI de la Convención Interamericana contra la Corrupción, 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 62 de la Ley de Ética Gubernamental, 6 letra i), 18, 21, 22, 24 y 25 de su homónima derogada y 60, 62, 63, 64 y 72 del Reglamento de la última, este Tribunal **RESUELVE:**

a) *Reactivese* el procedimiento contra la señora Rosalina Rivera viuda de Tenorio, el cual se encontraba suspendido en virtud de la resolución dictada a las nueve horas y

treinta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil doce, por haberse establecido que posee al presente la calidad de servidora pública.

b) *Sanciónese* con amonestación escrita a los señores Carlos Farabundo Molina Quinteros, Alcalde Municipal, Marcial Antonio Villatoro Herrera, Síndico Municipal, Manuel de Jesús Carpio Martínez, José Atilio Alcántara Benavides, José Dolores Romero, Cristóbal Carranza Rivas, Rafael Eduardo Núñez Villalta, Rosa Lilian Menjívar de Urrutia, Rosalina Rivera viuda de Tenorio y Vilma Maricela Corvera de López, regidores propietarios; todos ellos miembros del Concejo Municipal de La Libertad, durante el período comprendido de mayo de dos mil nueve a abril de dos mil doce, por haber transgredido la prohibición ética de *retardar sin motivo legal los trámites o la prestación de servicios administrativos*, contemplada en el art. 6 letra i) de la Ley de Ética Gubernamental derogada.

Transcurrido el término de ley, librense los oficios correspondientes a efecto de dar cumplimiento a la presente resolución.

c) *Absuélvese* a los señores Inocente Cárcamo Ibarra, Juan Carlos Ibarra Velásquez, Héctor Santos Portillo Romero y José Inés Jovel Tisnado, regidores suplentes del Concejo Municipal de La Libertad en el período de mayo de dos mil nueve a abril de dos mil doce, de la infracción ética que se les atribuyó.

d) *Incorpórese* al registro respectivo la sanción impuesta a los señores Carlos Farabundo Molina Quinteros, Alcalde Municipal, Marcial Antonio Villatoro Herrera, Síndico Municipal, Manuel de Jesús Carpio Martínez, José Atilio Alcántara Benavides, José Dolores Romero, Cristóbal Carranza Rivas, Rafael Eduardo Núñez Villalta, Rosalina Rivera viuda de Tenorio, Rosa Lilian Menjívar de Urrutia y Vilma Maricela Corvera de López, regidores propietarios; todos miembros del Concejo Municipal de La Libertad durante el período comprendido de mayo de dos mil nueve a abril de dos mil doce, y remítase la certificación pertinente a las instituciones que conforman el Ministerio Público, al Tribunal de Servicio Civil, la Corte de Cuentas de la República y al expediente de los sancionados.

Notifíquese.

PRONUNCIADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL QUE LO SUSCRIBEN.

Co2/ju 1